

# ECONOMÍA SOLIDARIA EN ARGENTINA. DEFINICIONES, EXPERIENCIAS Y POTENCIALIDADES

Ariel García y Alejandro Rofman

Investigadores del CONICET (Centro de Estudios Urbanos y Regionales)

## RESUMEN

Este documento tiene como objetivo conocer las potencialidades de la economía solidaria en el marco de las políticas públicas actuales que se despliegan en Argentina. En el trabajo se entiende que los procesos de descolectivización desarrollados hasta 2002 solo podrán revertirse si las instituciones estatales comparten un proyecto político. Como se observará a través de ejemplos, dicho proyecto propende a dinamizar la autonomía de los actores en la toma de decisiones a través de experiencias de economía solidaria. Se concluye que tales experiencias deberían potenciarse y replicarse en vistas a posibilitar la construcción de poder popular por parte de las organizaciones sociales. En este proyecto de país, el Estado debe acompañar brindando estrategias, recursos y metodologías que permitan fortalecer las organizaciones sociales bajo un enfoque de economía solidaria.

**PALABRAS CLAVE:** economía solidaria, descolectivización, exclusión social, agricultura familiar.

## ABSTRACT

«Solidarity economy in Argentina. Definitions, experiences and potentials». This research aims to determine the potential of the economic solidarity in the context of current public policies that are deployed in Argentina. This paper means that processes of decollectivization developed until 2002 can only be reversed if the state institutions share a political project. As will be seen through examples, the project tends to boost the autonomy of actors in decision making through experiences of economic solidarity. We conclude that such experiences should be enhanced and replicated in order to permit construction of popular power by social organizations. In this national project, the state must accompany providing strategies, resources and methodologies to strengthen social organizations with a focus on economic solidarity.

**KEY WORDS:** economic solidarity, decollectivization, social exclusion, family farm.

## INTRODUCCIÓN

Este documento surge de diversas reflexiones y experiencias desarrolladas en el marco de la labor cotidiana en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET y como docentes de la Maestría en Economía Solidaria de la Universidad Nacional de General San Martín y de la Carrera de Trabajo Social en la Universidad de Buenos Aires.



El trabajo tiene como objetivo conocer las potencialidades de la economía solidaria en el marco de las políticas públicas actuales que se despliegan en Argentina. A tales efectos, recurrimos a fuentes primarias —observación participante en distintas experiencias— y secundarias —fundamentalmente estadísticas y académicas—.

El documento se organiza en cinco apartados. En el primero se expone el marco teórico desde el cual se concibe la investigación. En el segundo, se detallan brevemente las políticas públicas características del proceso político y social iniciado en 2003. En el tercero se presentan algunas definiciones de economía solidaria como campo teórico en construcción. En el cuarto apartado, se describen dos experiencias de economía solidaria imbricadas en determinadas políticas públicas. Por último, se desarrollan reflexiones en torno a la investigación, no pensándolas en tono conclusivo, sino con ánimo de que estas sirvan para un debate urgente y necesario.

### ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DEL NEOLIBERALISMO EN ARGENTINA<sup>1</sup>

Las políticas públicas de inspiración neoliberal resultan largamente conocidas en América Latina. No se remontan solo a la «década perdida» de 1980 ni a su período de implementación «más exitosa», en el decenio de 1990. En Argentina, las mismas pueden rastrearse al menos desde el gobierno dictatorial de la autodenominada «Revolución Libertadora» que derrocó al Gobierno constitucional de Juan Domingo Perón en 1955. Esta constante en las políticas neoliberales se extiende entre aquel año y 2002, con lapsos honrosos de intento de regreso a políticas keynesianas. A pesar de los intentos neoliberales durante medio siglo, el lapso 1989-2001 resulta el momento de profundización de las políticas de corte monetarista implementadas a partir de la última dictadura militar —que gobernó el país entre 1976 y 1983— (Basualdo, 2011: 18-19). Una de las consecuencias más significativas de la perdurable inspiración neoliberal en las políticas públicas ha sido la desarticulación de las relaciones de producción propias del keynesianismo y del Estado de Bienestar, disgregándose una estructura social en la cual el trabajo ocupaba un lugar central (Rosa *et al.*, 2012: 2).

En esta *nueva sociedad*, el pleno empleo característico del Estado de Bienestar desapareció, mientras surgían y se consolidaban el desempleo estructural y la subutilización de la fuerza de trabajo, sin la contrapartida de paliativos estatales suficientes (Rofman, 1999). El resultado de estas transformaciones ha sido un proceso de desestabilización socio-económica de sectores significativos de la población que en el pasado habían alcanzado derechos asociados a la posición de un empleo estable y relativamente bien remunerado —jubilación, aguinaldo, acceso a créditos, relaciones laborales sujetas a legislaciones que amparaban al trabajador, etc.— (Tenti Fanfani, 1996). Para este autor, la expresión *nuevos pobres* resulta útil para indicar

---

<sup>1</sup> Este apartado retoma consideraciones efectuadas en un trabajo reciente de los autores (Rosa *et al.*, 2012).



un empeoramiento en las condiciones de vida, que no se redujeron solamente a una pérdida del salario real, más bien se estaba en presencia de una significativa variedad de situaciones de *exclusión social*.

Las transformaciones impulsadas por las políticas públicas en la estructura económica argentina —fundamentalmente signadas por la desregulación, privatización, incentivos a grandes empresas y descentralización de servicios y programas sociales, educativos y sanitarios— condujeron a una *movilidad vertical descendente*, concentración del ingreso y consolidación de la pobreza. Este llevó a una paulatina fragmentación social (Andrenacci, 2002: 13). A partir de la década de 1970, esta situación se tradujo en experiencias de *descolectivización* masiva de los sectores populares (Svampa, 2000).

En este escenario de *descolectivización* se instala el debate respecto de qué hacer con la población que no lograba insertarse plenamente en el mercado de trabajo formal. Como cuestión de fondo, tal debate presupone una disputa *por la definición conceptual de este excedente*. Uno de los conceptos intervinientes fue el de *masa marginal*, planteado por José Nun hacia finales de la década de 1960. A través del concepto de *ejército industrial de reserva*, Marx caracteriza los efectos funcionales de la superpoblación relativa en la fase del capitalismo de mediados del siglo XIX. Considerando este concepto y su contexto histórico, Nun propone que se denomine *masa marginal* al sector de la superpoblación relativa que era excluida del mundo del trabajo debido a su incapacidad técnica o a su falta de vinculación con el perfil de la demanda en la fase concentradora del modelo económico dominante (Nun, 2001: 87).

A partir de la década de 1980, el incremento de la *masa marginal* y la ausencia de políticas de empleo estructurales influyeron en un crecimiento de experiencias de autogeneración de empleo por parte de los sectores populares. En este contexto, la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y particularmente el PREALC (Programa de empleo para América Latina y el Caribe) populariza el concepto de *sector informal* para hacer referencia a las actividades de autogeneración de empleo<sup>2</sup> considerando las unidades productivas (Merlinsky y Rofman, 2005).

Si bien existen diferencias sustanciales entre las perspectivas teóricas mencionadas, encontramos en ellas algunos puntos de encuentro, que tienen consecuencias relevantes tanto en el plano analítico como en el práctico. En primer lugar, el marco conceptual marxista de Nun y la perspectiva del sector informal perciben el fenómeno en términos negativos. En el caso de *masa marginal*, este hace referencia explícitamente a una *masa disfuncional* al sistema. Y en cuanto al planteo de la OIT, Merlinsky y Rofman (2005) consideran que este trata al *sector informal* y al *sector formal* como parte de una misma estructura productiva en la cual se supone una subordinación del primero sobre el último.

Una segunda cuestión es que estas visiones desestiman que el funcionamiento de los emprendimientos de autogestión de los sectores populares implica relaciones de cooperación y solidaridad. Al respecto, Merlinsky y Rofman (2005) revalorizan al

---

<sup>2</sup> Cuentapropistas, pequeñas empresas familiares, trabajo no registrado, servicio doméstico, entre otros.



sector de la actividad económica que no participa plenamente en el mercado ni forma parte de la economía pública. Dentro de esta línea, el sustrato económico informal es redefinido como parte de la Economía Solidaria (Merlinsky y Rofman, 2005: 162).

En tercer lugar, entendemos que las perspectivas planteadas sobre la *población sobrante*, al caracterizar negativamente los emprendimientos de autogeneración de empleo, descartan todo análisis detallado de las particularidades de estas experiencias. Esta omisión, lleva a que las conceptualizaciones terminen siendo *insuficientes al momento de definir políticas públicas* para el sector. En estos casos y bajo preceptos neoliberales, el desempleo consiste en situaciones temporarias (determinadas por la búsqueda de «un nuevo punto de equilibrio» entre la oferta y la demanda del mercado de trabajo). Por lo tanto, los programas de empleo que tenían como objeto de política solo a quienes estaban en situación de extrema pobreza también eran temporarios. En fin, *políticas sociales focalizadas* (entiéndase por estas a aquellas prestaciones estatales restringidas a un grupo social delimitado en función de determinado/s indicador/es de privación) como las de empleo funcionaban como *subsidios* que intentaron en vano compensar los efectos de la reestructuración económica. El fundamento teórico de estas políticas partía de una visión que establecía una separación radical entre la política social y la economía.

Una última consecuencia teórica que deriva de las visiones descriptas es que éstas suponen un *sujeto pasivo* o, en todo caso, un sujeto que actúa ante los cambios estructurales pero de manera marginal e incompleta. Sin embargo, parece relevante señalar que a partir de la *crisis orgánica o de representación* que se dio en Argentina hacia fines del 2001, comienza a revertirse el antedicho proceso de *descolectivización* masiva, proceso en el cual los actores suelen poseer un rol activo.

El proceso de *descolectivización* masiva impulsado por las políticas públicas de cuño neoliberal ha sido resistido por los sectores populares mediante acciones tendientes a afrontar la crisis social y económica por la que atravesaron el último cuarto de siglo xx. Aquí resulta necesario abordar estas prácticas desde una perspectiva que permita captar la capacidad activa de los sectores populares. En tal dirección puede considerarse el concepto *estrategias de vida* de Urcola (2010)<sup>3</sup>. Éstas son estrategias adaptativas (de reproducción) y de cambio (creativas). Un sujeto con tales estrategias posee un carácter *activo* e inventivo junto a la capacidad de improvisar ante situaciones imprevistas y/o novedosas. En este sentido, el concepto de *estrategias de vida* permite problematizar el sesgo unilateral y negativo que implica la denominación de *sector informal*.

Al respecto, Minujín (1993) resalta el *aspecto creativo de las crisis sociales*, donde «lo social también es capaz de morfogénesis imprevisible, de lo inédito, de una producción continua de sí mismo en el cual orden y desorden actúan juntos, de un acrecentamiento de la complejidad multiplicador de los posibles y, por consiguiente, es un factor de complejidad» (Balandier, 1989, citado en Minujín, 1993:

---

<sup>3</sup> El autor, entiende que éstas son el conjunto de prácticas y acciones económicas, sociales, culturales y demográficas por medio de las cuales los sujetos o familias, condicionados por la posición social desfavorable, tienden (de manera explícita o implícita) a conservar o aumentar su patrimonio (de bienes materiales, culturales y simbólicos) y a la concreción de planes y proyectos con el fin de mantener o mejorar su posición en la estructura de relaciones sociales (URCOLA, 2010: 116).

6). En definitiva, se trata de evitar entender al empobrecimiento como un proceso de pura pérdida y contracción, ya que puede llevar a desestimar la cantidad de nuevos recursos y estrategias que los sectores populares debieron elaborar para sobrevivir en la caída de sus condiciones y expectativas de vida.

Desde la percepción de los autores, las experiencias participativas desarrolladas en los últimos años demuestran un cambio de carácter cualitativo en las prácticas de autogeneración de empleo. A las actividades propias del *sector informal* se le suman nuevas prácticas. Éstas tienen la novedad de ser solidarias y de cooperación, a la vez que salen de la esfera privada para ser expresadas en la esfera pública, adquiriendo así una impronta fuertemente política. Al respecto, Merlinsky y Rofman (2005) ven en esta etapa un nuevo escenario en que «estas experiencias combinan las viejas prácticas de la economía doméstica que forman parte del sustrato económico informal (actividades generadas por los propios trabajadores y cuyo objetivo principal es contribuir a la reproducción de la fuerza de trabajo como tal) y prácticas nuevas donde lo original es la «politización de formas de producción que saltan a la esfera pública, situándose en el ámbito de la Economía Social» (Merlinsky y Rofman, 2005:162, el entrecomillado es nuestro).

Puede observarse entonces cómo a la proliferación de experiencias vinculadas al cuentapropismo y al trabajo informal se le suman: a) nuevas experiencias productivas como los micro-emprendimientos gestionados por movimientos de desocupados, empresas recuperadas<sup>4</sup>, clubes de trueque, etc; y b) un incipiente cambio de rumbo de las políticas sociales y de empleo hacia la perspectiva de la Economía Solidaria (Merlinsky y Rofman, 2005: 162). Ambos factores suponen un *giro* radical respecto de las políticas de empleo de la década del 1990, el cual será abordado a continuación.

## ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PROYECTO DE PAÍS

La recomposición de la autoridad y legitimidad del Estado como actor preponderante de la vida económica y política de Argentina, conjuntamente con el retorno de la deliberación política como instrumento catalizador de las acciones públicas, estaría jugando un papel excluyente luego del derrumbe de la experiencia neoliberal. A partir de 2003, desde este ámbito fundamentalmente democrático se construye el resto del andamiaje político y económico que intenta conformar un nuevo proyecto del país (Vázquez Blanco y Rofman, 2011: 36).

En este nuevo proyecto de país, que puede denominarse *sociedad del trabajo*, se desarrollan instrumentos de política pública que constan de acciones en instancia de implementación o de estudio. Tales acciones y los componentes básicos se caracterizan por perseguir principios de equidad y justicia distributiva que se contraponen a un

---

<sup>4</sup> Según VÁZQUEZ BLANCO y ROFMAN (2011: 47), estas empresas gestionadas por obreros permitieron poner en actividad más de 12.000 puestos de trabajo en Argentina.



proyecto neoliberal de país concebido desde una perspectiva de *sociedad de mercado*, de perfil social excluyente y de carácter regresivo. En el proyecto actualmente en curso, el poder político intenta ser sostenido desde una coalición popular con eje en los sectores del trabajo organizado y el conjunto de las franjas sociales, que incluyen a la población de menor ingreso. En contraposición, el proyecto neoliberal articula una estructura de poder altamente concentrada, con lazos internos y externos con el capitalismo financiero especulativo y las franjas sociales de mayor ingreso (Vázquez Blanco y Rofman, 2011: 36-37). A través de esta descripción no se intenta exponer una imagen estática ni dualista de las alianzas de poder, aunque sí describir cuestiones frecuentes que forman parte de cada proyecto de país.

Las dimensiones y/o procesos del proyecto de *sociedad del trabajo* y de *sociedad de mercado* pueden sintetizarse en la siguiente tabla. Este esfuerzo de síntesis apunta a presentar aspectos generales —por lo que se recurre a simplificarlos—, considerando que la realidad resulta más compleja (ver tabla 1).

La síntesis expuesta resulta útil a los efectos de comprender la diversidad que pueden adquirir las políticas públicas en función del proyecto de país que las sustente explícita o implícitamente. Algunas acciones paradigmáticas de la política económica y social inscriptas en el proyecto de *sociedad de trabajo* pueden ilustrar el perfil de la política económica de la etapa actual, que apunta a consolidar y desarrollar el mercado interno, dotar de recursos financieros a los sectores de menor nivel de concentración del capital y garantizar la solvencia financiera del Estado.

A modo de ejemplo, citamos algunas acciones paradigmáticas:

El plan de *desendeudamiento del Estado*, mediante el uso de reservas, a fin de mejorar la posición financiera del país y ganar independencia. Esta acción comenzó en 2005 con la exitosa reestructuración de la deuda pública —la más significativa de la historia financiera mundial—, prosiguió en 2006 con el pago de la deuda con el FMI y culminó en 2010 con la definitiva reestructuración del endeudamiento del Estado.

El *retorno al ámbito estatal del sistema previsional*, que dota al Estado de importantes fondos públicos para afrontar contingencias económicas mundiales desfavorables y estimular el crecimiento económico-social<sup>5</sup>. En esta línea de acción puede inscribirse el incremento de la demanda agregada vía el fortalecimiento del mercado interno que ha posibilitado el aumento de la jubilación mínima, establecido por Ley desde 2009<sup>6</sup>. Tal subida supera ampliamente la tasa de

---

<sup>5</sup> En 2009, al estatizarse los fondos previsionales que gestionaron durante 14 años las AFJP —Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones— la ANSES —Administración Nacional de la Seguridad Social— encontró un saldo de 98.224 mil millones de pesos. En octubre de 2011, a menos de dos años de gestión estatal, dichos fondos habían trepado a cerca de 200 mil millones de pesos (página 12, 10-12-2011).

<sup>6</sup> La Ley 26.417 de Movilidad fue sancionada en 2009 y prevé la actualización automática semestral de las jubilaciones y pensiones en función de un indicador que considera dos variables: el índice del aumento general de salarios del último semestre publicado por el INDEC —Instituto Na-



TABLA 1. PROYECTO DE SOCIEDAD DEL TRABAJO Y DE SOCIEDAD DE MERCADO.

DIMENSIONES O PROCESOS	PROYECTO INCLUSIVO Y DE JUSTICIA DISTRIBUTIVA O DE SOCIEDAD DE TRABAJO	PROYECTO EXCLUSIÓN SOCIAL Y DE DISTRIBUCIÓN REGRESIVA O DE SOCIEDAD DE MERCADO
Economía	Sostenida por la deliberación política.	Convertida en el dominio de los técnicos.
Estado	Actor principal en la economía de un país, fijando prioridades productivas con el conjunto de la sociedad.	Marco jurídico para la realización y protección de los negocios de las corporaciones.
Mercado	Mercado sometido a los controles estatales. Incentivo a los procesos solidarios basados en la Economía Social.	Mercado sin controles estatales; economía sometida a la Ley de la oferta y la demanda dominada por los grandes grupos económicos.
Agro	Actividad productiva basada en procesos social, cultural y ambientalmente sustentables. Aliento de la agricultura familiar destinada a lograr la soberanía alimentaria nacional. Agricultura con agricultores.	Actividad tendiente a la consolidación de una economía agroexportadora apoyada en los avances de la revolución verde y la biotecnológica generalmente provenientes de centros internacionales de I+D y basada en procesos rentísticos financieros. Agricultura sin agricultores.
Industria	Ligada al crecimiento y complejización del mercado interno y al control/limitación de la importación: industrialización para sostener el empleo urbano y crear valor agregado.	Desregulación del comercio exterior posibilita la práctica de dumping entre productos importados. Desindustrialización y simplificación del tejido productivo.
Organización del mercado mundial	El país se desarrolla a través de tramas productivas diversificadas, con reparto equitativo de excedentes entre los agentes económicos involucrados, integrándose al comercio internacional a través de acuerdos regionales.	Países especializados en determinadas producciones en términos de ventajas comparativas estáticas, abandonando otras a la importación. Argentina como país agrícola-ganadero.
Mundialización	Organización de acuerdos regionales (Mercosur, Unasur, Celac) que se insertan apoyadas en sus particularidades idiosincráticas al capitalismo global.	Globalización como única lógica del capitalismo para todas las regiones por igual que beneficia a los países centrales —y en ellos a grupos económicos que se benefician con la libre circulación de factores—.
Riqueza	Redistribución: accionada por el Estado que supone la democratización del acceso al crédito, al capital a la tecnología, al conocimiento y al excedente económico.	Acumulación: Teoría del derrame: primero acumular y después distribuir. La distribución depende de las relaciones de poder dentro de la Sociedad, que determinan un dominio acentuado del sector más concentrado.
Crecimiento	Mercado interno como instrumento de integración nacional. Esto supone la desconexión de los precios internos de los externos mediante el cobro de los derechos de aduana de la exportación por parte del Estado y la limitación de importaciones.	El dinamismo de una economía se logra por el desarrollo del mercado externo, por eso se supone la necesidad de salarios bajos para hacer más competitivas las exportaciones.
Crédito	Debe expandirse a empresas y personas. La obra pública financiada por los créditos locales o de banca pública regional (Banco del Sur).	Disminución del crédito barato y endeudamiento externo del país para la realización de obras públicas.





Balanza comercial/fiscal	Superávit gemelos (fiscal y comercial).	Compensada con el endeudamiento externo.
Tipo de Cambio	Tipo de cambio alto y competitivo que garantice la salida exportadora creciente, torne los productos cada vez más competitivos y amortigüe la competencia externa de los productos importados.	Tipo de cambio libre, preferentemente bajo para permitir la importación de bienes del exterior provenientes de las grandes multinacionales (maquinarias, bienes de consumo, productos intermedios, etc.). Posibilidad de entrar y salir libremente con capitales a tipo de cambio prefijado para negocios financieros de cortísimo plazo.
Empleo	Intenta fortalecer el empleo formal en las aglomeraciones urbanas y del área rural a través del incremento de la actividad productiva con la agregación de valor y de los servicios asociados a ella, estimulando el incremento del empleo.	Intenta fortalecer la ganancia del capital concentrado, con políticas de ajuste y flexibilización del trabajo.
Salarios	Salarios como determinantes del desarrollo del mercado interno. A mayor salario mayor gasto; a mayor gasto más crecimiento de las industrias y mayor empleo.	Salarios bajos para hacer más competitivos los productos porque el salario se considera como la mayor incidencia en el valor final del producto. Para esto hace falta una masa de desempleados de modo de hacer que sea menor la demanda de trabajo que la oferta.
Impuestos	Sobre los beneficios y la riqueza acumulada, sobre la exportación de bienes con alto contenido de renta de la tierra	Bajo sobre la riqueza, alentando la supuesta capitalización de los más ricos y bajos porcentuales sobre las ganancias.
Tasas de interés	Aliento a tasas de interés activas iguales o menores que la tasa de inflación y otorgadas con criterios selectivos según grupo social y destino productivo, con subsidios para bajarlos lo máximo posible.	Total libertad del sistema financiero para fijar condiciones sin prioridades ni beneficios selectivos.
Demandas sociales significativas	Empleo, Ingreso, seguridad ciudadana, lucha anticorrupción	Calidad del empleo, seguridad ciudadana, conflictos ambientales, transporte, tierra y hábitat popular.

Fuente: Elaboración propia en base a VÁZQUEZ BLANCO y ROFMAN (2011, Tabla 1).

inflación desde 2003. A este mecanismo debe agregarse la incorporación de dos millones y medio de jubilados nuevos, en especial aquellos que nunca se hubieran jubilado por la carencia de documentación y aportes pertinentes,

cional de Estadística y Censos— y el aumento de la recaudación tributaria *per cápita* de ANSES. Desde su implementación se ha producido un aumento total del 144,5%. Además, desde 2003 a la fecha, el haber mínimo se incrementó en un 1025%, multiplicándose su valor en 11,25 veces. Antes de su aplicación en 2009, el haber mínimo era de \$690, en marzo de 2012 ascendió a \$ 1.687 (ANSES, 2011).



lo que transforma a Argentina en el país con mayor cobertura previsional de América Latina —95,1% de la población pasiva— (ANSES, 2011).

El sistema de *subsidios al consumo* (transporte, servicios públicos, etc.), a fin de atender las necesidades de los sectores más vulnerables. En tal aspecto, cabe considerar que desde finales de 2011 se comenzó un proceso gradual de re-direccionamiento de subsidios que propende a ir cambiando el sujeto receptor de aquellos, al dejar de estar destinados directamente a las empresas prestatarias para ser dirigidos a los usuarios —entre ellos, los de menor recurso—.

La política de *protección industrial*, en el marco de los lineamientos de la OMC, para evitar los efectos de la competencia desleal externa sobre la actividad sectorial. En tal sentido y en relación a las importaciones de manufacturas, cabe considerar las licencias no automáticas y las más recientes declaraciones juradas que deben presentar para su análisis y control los importadores antes de realizar compras en el exterior.

La *implementación de créditos blandos*, a tasas subsidiadas gestadas desde los más diversos instrumentos de políticas públicas para micro-emprendimientos (centralmente desde la Comisión Nacional de Microcrédito y del Fondo de Capital Social) y PYMES (fundamentalmente desde el Banco de la Nación Argentina), orientadas hacia la formación de capital de trabajo y bienes de inversión.

La *estatización de empresas privatizadas* que han detentado niveles insatisfactorios en la provisión social de los servicios públicos (agua y saneamiento, transporte aéreo y correo postal).

*Programas paralelos* que intentan recuperar los estándares sociales de la década de 1970. En tal aspecto, cabe considerar a la *Asignación Universal por hijo para Protección social* (AUH del ANSES) y al programa Ingreso Social con Trabajo, *Argentina Trabaja* (del Ministerio de Desarrollo Social). La AUH se implementó a fines de 2009 y se destina a brindar cobertura a todos los menores de 18 años cuyos padres no cobran la Asignación Familiar a la cual tienen acceso los trabajadores del mercado formal. Por un lado, la AUH logró reducir la indigencia entre un 55 y un 70%, retornando así a los mejores niveles de los que se tengan registro en la historia argentina (resultado que se alcanza cualquiera sea el índice de precios utilizados para establecer el valor de la canasta de subsistencia). Por otra parte, el indicador más arquetípico de desigualdad (cuántas veces ganan los ricos más que los pobres) disminuye más del 30%, llevando a que la Argentina se transforme en el país más igualitario de América Latina (ranking otrora comandado por Uruguay y Costa Rica). Por último, con la implementación de la AUH los indicadores de pobreza también se han reducido, especialmente cuando se valoriza la línea de pobreza a precios ajustados por el índice de precios al consumidor elaborado por 7 provincias (Agis *et al.*, 2010: 34).

Las acciones mencionadas dan cuenta de la orientación predominante en la economía política actual. Las mismas intentan imprimirle una dirección a la economía



nacional. Sin embargo, resulta pertinente desarrollar un conjunto de situaciones y experiencias que intentan dotar de sentido a tal dirección. Se trata de la promoción y el fortalecimiento de la Economía Solidaria como parte de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

## DEFINICIONES Y PROCESOS<sup>7</sup>

La economía social o solidaria<sup>8</sup> encuentra su identidad en el esfuerzo de cooperación entre seres humanos con miras a ofrecer y desarrollar formas de gestión alternativas a la actividad productiva capitalista. En tal esfuerzo de cooperación se reconoce como eje fundamental la cooperación, la solidaridad en toda la cadena de valor y la sostenibilidad ambiental. La economía solidaria comprende todas las expresiones productivas de bienes y servicios que se rigen por el principio fundante de asegurar la mejora en la calidad de vida de las sociedades; contraponiéndose a los objetivos hegemónicos del sistema capitalista, que privilegia el lucro, la competencia y la obtención de la máxima tasa de ganancia individual.

Tales prácticas desandan un extenso camino hasta que comienzan los intentos de teorización, iniciados a mediados del siglo XIX en Francia. En 1830, Dunoyer publica el *Nuevo Tratado de economía social*; en 1833, Saint Simon presenta *Nuevo Cristianismo*. A estos textos, usualmente influidos por el romanticismo, se suman los escritos de los socialistas Pecqueur, Vidal y Malon con la edición del *Tratado de economía social* en 1883.

Más allá de intentos de teorización, la economía social europea de primera generación posee sus primeras experiencias en la Argentina de fines del siglo XIX, a través de la llegada de inmigrantes de aquel origen. Generalmente, se trataba de emprendimientos de carácter agrario. Se destacan la «Compañía Mercantil de Chubut» (1885) y la Sociedad Cooperativa de Seguros Agrícolas y Anexos Ltda, «El Progreso Agrícola» en Pigüé (1898). Esta última es la cooperativa más antigua en funcionamiento<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Este apartado se basa en un trabajo recientemente publicado (VÁZQUEZ BLANCO y ROMAN, 2011).

<sup>8</sup> La opción por la denominación «economía solidaria» en vez del término quizás más difundido, «economía social» no resulta casual. Nótese que HINTZE (2010: 17) encuentra que cualquiera fuera la elección, la misma posee como antecedente «un extenso debate académico en Europa y América Latina (entre otros DEFOURNY, 2003, a y b; LAVILLE 2004 a, b, y c; CORAGGIO, 1999; SINGER, 2004), así como en los movimientos sociales. De hecho, reconoce antecedentes históricos de largo plazo. La economía social es un movimiento iniciado en el siglo XIX en Europa, entre cuyos antecedentes —en tanto pensamiento crítico al capitalismo— pueden mencionarse a Saint-Simon, Owen, Fourier y ciertas vertientes del marxismo (SANTOS, 2002; DEFOURNY, 2003a; SINGER, 2004). La discusión sobre la denominación tiene componentes conceptuales, ideológicos y valorativos, e incluso de procedencia geográfica, referidos a un campo en construcción que en América Latina comienza a tomar entidad a fines de la década» de 1990.

<sup>9</sup> COLLI y OLIVIER (1963) contabilizan 56 cooperativas hasta 1900 en Argentina.



Desde sus primeras experiencias, la economía solidaria se ha conformado como espacio en la dinámica económica y social de una significativa proporción de los países occidentales. El estudio presentado por Anheier (2000) abarca a 8 países —Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Suecia y Hungría— y señala que para 1990, el tercer sector<sup>10</sup> ocupaba a casi 12 millones de personas a tiempo completo, equivalente al 3,3% del empleo total para los mencionados países (Salminis, 2004). Por su parte, Archambault (2010) concluye que en 1995 el sector no lucrativo de Francia —incluidas las congregaciones religiosas— empleaba a 975.000 trabajadores equivalentes a jornada completa, representando cerca del 5% del empleo total y una contribución del 6,3% al PBI. Finalmente, Salamon y Anheier (citado en Marabotto, 2000) estiman que para 1999 en 22 países relevados, el tercer sector (entre los que se cuenta la Argentina) movilizaba 1,1 billón de dólares estadounidenses y ocuparía a 19 millones de personas.

En la Argentina, según la base de datos del INAES —Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social— (2008), las cooperativas y mutuales reúnen a cerca de 15 millones de asociados. Estimaciones realizadas sobre la misma base advierten que participan con más del 12% en el PIB. Es decir que aproximadamente un 38% de la población del país, participa de una institución de la Economía Solidaria registrada (Vázquez Blanco y Rofman, 2011).

En cuanto a los servicios públicos, en 2005 el 60% de establecimientos rurales en la Argentina contaba con energía eléctrica (198.098 usuarios en 15 provincias) y el 58% de las conexiones energéticas era provisto por Cooperativas<sup>11</sup>. También para 2005 se registraban 597 cooperativas que prestaban el servicio de distribución de energía eléctrica al 17% de los usuarios, de los cuales el 5,5% corresponde al área rural<sup>12</sup>.

El estudio de INAES (2008) contabiliza más de 1.200 cooperativas de servicios públicos, un número similar de cooperativas de vivienda y más de 1.000 de consumo. Luego de este breve recorrido sobre las dimensiones de la economía solidaria en Argentina, resulta interesante observar el volumen e importancia que va adquiriendo un nuevo tipo de organizaciones en relación a la reproducción sobre bases asociativas de la vida cotidiana.

En el contexto inmediato posterior y anterior a 2001, con la profundización de la desigualdad y el aumento de la pobreza en Argentina, emerge y crece de forma significativa la asociatividad y los emprendimientos solidarios en una nueva fase de

---

<sup>10</sup> Aquí no pretendemos simplificar en el uso de la denominación «tercer sector» en reemplazo a la «economía social y solidaria» pero para los casos de países reseñados se dispone sólo de estadísticas para dicho sector, lo cual puede ser indicativo de la potencialidad que podría abarcar a la economía social y solidaria. Dicha diferencia de términos, doctrinas y teorías que los sustentan exceden el alcance del presente artículo.

<sup>11</sup> De acuerdo a un «informe del sector eléctrico publicado en 2005 por la Dirección Nacional de Prospectiva de la Secretaría de Energía (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación), la distribución de la energía (medidos en MWh) se reparte de la manera siguiente: 64% corresponde a entes provinciales, 26% a grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista, 10% a organizaciones Cooperativas (VÁZQUEZ BLANCO y ROFMAN, 2011: 48).

<sup>12</sup> De la información anterior se observa cómo ese porcentual fue incrementándose entre 1997, 2002 y 2005, desde 15%, 16 y 17% respectivamente (ver Gallo, 2007).



su desarrollo. En realidad, este fenómeno puede percibirse en el resto de América Latina. Por caso, considerando la experiencia de Brasil, Gaiger (2003: 181) señala que desde la década de 1990 cobran relevancia emprendimientos populares basados en la asociación libre, en el trabajo cooperativo y/o en la autogestión, apuntalados en la participación de sus integrantes.

Situaciones recientes de la economía solidaria confirman lo anterior:

Las experiencias promovidas por el Estado, que abarcan desde los programas e iniciativas de microcréditos hasta los emprendimientos productivos en distintos rubros, contabilizan un número mayor a 200.000 unidades receptoras de apoyo integral. Esta dimensión se obtiene al sumar solamente los emprendimientos que responden a políticas públicas vinculadas a la Comisión Nacional de Microcréditos, FONCAP y Fuerza Solidaria, los cuales pueden concebirse como un espacio de multiplicación y enriquecimiento de experiencias asociativas de pequeña a mediana escala;

Las Empresas Recuperadas por los Trabajadores permitieron conservar y poner en actividad más de 12.000 puestos de trabajo. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, en los últimos años, se reactivaron 20 de ellas;

El Plan de Desarrollo Local y Economía Solidaria «Manos a la Obra» ha contribuido a desarrollar y consolidar miles de emprendimientos productivos asociativos con cadenas de agregación de valor y servicios de apoyo a la producción, además de haber aportado en poner a la economía solidaria como clave en la reconstrucción del trabajo y redes sociales (Merlinsky y Rofman, 2005).

En resumen, las iniciativas con formas de organización del trabajo no capitalista se han ido multiplicando a través de esfuerzos crecientes de personas que transitan o vienen atravesando su existencia laboral en el *sector informal* a través de *estrategias de vida*. En la actualidad, estas experiencias suelen ser de tipo familiar, asociativo o comunitario y adoptan diferentes formas jurídicas —principalmente las cooperativas de trabajo — aunque predominan los emprendimientos informales.

Estas experiencias poseen alcance y expectativas diversas. En efecto, la sustentabilidad económica y social de dichos emprendimientos (por ende también las posibilidades de asegurar una buena vida para sus integrantes) recorre una amplia gama de situaciones. De este modo, pueden hallarse emprendimientos de infra-subsistencia —que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de una familia—, experiencias que alcanzan a satisfacer la subsistencia familiar y algunas que transitan procesos de reproducción ampliada del capital de sus unidades productivas. Entre estas experiencias, se incluye a la agricultura familiar, iniciativas productivas de las comunidades de pueblos originarios —ambas de larga data—, pequeños emprendimientos urbanos en diferentes rubros —comedores o huertas comunitarias, empresas recuperadas por sus trabajadores—, redes de comercio justo y consumo responsable, ferias francas de la agricultura familiar, cooperativas de crédito, servicios y trabajo, emprendimientos familiares que comparten asistencia técnica, formas de producir y/o canales de comercialización y microcréditos que forman parte de «bancos» populares o sociales, entre otras alternativas.



## EXPERIENCIAS ACTUALES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA<sup>13</sup>

Como consideran Cittadini *et al.*, (2010: 24), en las experiencias de economía solidaria aparecen búsquedas por construir un modo alternativo de satisfacción de las necesidades familiares y comunitarias. En las mismas puede observarse que: a) se intenta recuperar el sentido creativo y autogestionario del trabajo; b) se registran principios de autarquía en la toma de las decisiones, de reciprocidad en los vínculos que se desarrollan, saberes y bienes que se comparten y se redistribuyen; y c) se construyen espacios dirigidos a planificar y pensar la organización de lo complejo (Cittadini *et al.*, 2010).

Las características enunciadas pueden ir variando, debido a que las experiencias de economía solidaria deben enmarcarse en un contexto socio-histórico determinado. También dependen del sector de actividad desde el cual aquellas se desarrollan. En el caso del sector agropecuario, la capacidad de organización social ha sido significativamente afectada por la irrupción de la Dictadura Militar de 1976. Tras la recuperación democrática de 1983 y a pesar de las dificultades económicas sucedidas hasta 2003, se ha registrado un paulatino proceso de recuperación, tanto a partir del trabajo de dirigentes de antiguas organizaciones que aportan su experiencia, como de productores y técnicos jóvenes y al trabajo de algunas ONGs e instancias públicas como PSA, ProHuerta, INTA Minifundio, Cambio Rural y más recientemente la Subsecretaría de Agricultura Familiar y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF)<sup>14</sup>, etc.

El trabajo de reconstrucción de la capacidad organizativa resulta arduo. Desde quince años a esta parte se han venido instalando numerosos grupos y organizaciones locales, que todavía, en una proporción importante, operan de forma atomizada, limitadas cada una a sus objetivos y con un radio de acción sobre zonas cercanas e inmediatas, sujetas a las posibilidades de financiamiento estatal y con notorias dificultades para articularse con sus pares. El proceso de *descolectivización* de las décadas anteriores deja una significativa herencia.

A pesar de estas dificultades, desde mediados de la década de 2000, han ido creciendo espacios de articulación entre estos grupos y organizaciones locales en busca de reconstruir la capacidad de acción del sector. Esta capacidad resulta necesaria si se pretende dotar de sentido a una noción hegemónica de desarrollo agropecuario que incorpore las necesidades sociales del país y que incluya a sus participantes directos, los agricultores y productores familiares.

---

<sup>13</sup> El presente apartado se basa en MDS-MINAGRI (2010: 33-73).

<sup>14</sup> El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF) ha surgido en 2005 en el marco del INTA. Desde su creación, el principal objetivo establecido ha sido trabajar en la generación, validación y rescate de tecnologías apropiadas que propendan a mejorar las condiciones productivas, económicas y sociales de la agricultura familiar. Para ello, se han desarrollado Institutos IPAFs, los cuales han sido localizados en las regiones del país para avanzar en variadas estrategias y líneas de acción (MDS-MINAGRI, 2010: 5).



Al respecto, cabe considerar la experiencia del norte de Santa Fe dirigida a la producción de arroz agroecológico. Hacia 2005, la mencionada situación nacional posee su eco en la constitución de la *Mesa de Representantes de Organizaciones de la Agricultura Familiar del Norte de Santa Fe*, que reúne unas 20 entidades de la región<sup>15</sup>. El objetivo de este espacio consiste en contraponerse al modelo de desarrollo rural local, basado en la valorización financiera de la propiedad y de la producción (arriendos de explotaciones agropecuarias para la siembra de soja transgénica) y proponerse desacelerar el proceso de expulsión del agricultor familiar de su explotación. Tal propuesta consiste en hacer operativos los preceptos de la agroecología<sup>16</sup> como paradigma de desarrollo rural que posibilita una resolución conjunta de problemas contemporáneos provocados por el monocultivo de exportación y el deterioro del suelo.

La citada articulación ha sido posible en el marco de las iniciativas conjunto de la Comisión Nacional de Microcrédito (CONAMI) del Ministerio de Desarrollo Social; el IPAF de la Región Pampeana del INTA y la Subsecretaría de la Agricultura Familiar. Los objetivos de esta intervención han apuntado a: a) potenciar la capacidad organizativa de los agricultores familiares; y, b) perseguir una diversificación de las alternativas productivas de las pequeñas producciones familiares para mejorar su sustentabilidad económica productiva y social.

En el actual contexto social también puede considerarse la experiencia de los *productores mimbreros de las Islas del bajo Delta del río Paraná*<sup>17</sup>. En las últimas décadas, estos productores sufrieron un proceso de destrucción de sus fuentes de trabajo debido a la aparición y difusión de materiales plásticos —que actúan como

---

<sup>15</sup> «La herramienta de microcrédito en esta experiencia implicó asumir la integralidad del productor en su territorio, no solo como productor de arroz, el arroz es experimental. Los productores tienen actividades diversas y en la región encontramos quienes se dedican principalmente a la actividad agrícola y también pescadores. Los productores venían vinculados al Foro de la Agricultura Familiar de la Zona Norte, al Programa Social Agropecuario (PSA) o vinculados a la experiencia de Naturaleza Viva. Es decir, existe una heterogeneidad de procedencias, de actividades que hacen a la constitución del grupo y al instrumento. Se constituye así un espacio de vinculación entre el Estado y los productores, quienes se transforman en el sujeto del proyecto» (MDS-MINAGRI, 2010: 40).

<sup>16</sup> «La agroecología es una ciencia que estudia los principios sobre los cuales se debe basar el diseño de una agricultura sustentable; es decir, una agricultura que sea ambientalmente sana, que sea diversificada y que rompa el monocultivo para que así no dependa de insumos agrotóxicos externos que son caros y ecológicamente peligrosos. Pero la construcción de esta nueva agricultura también busca la viabilidad económica y la justicia social. Por esta razón, la agroecología debe complementarse con políticas agrarias que busquen la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos naturales y la eliminación de la pobreza rural; lo que nosotros denominamos una agricultura sustentable» (ALTIERI, 1985; citado en MDS-MINAGRI, 2010: 37).

<sup>17</sup> «En 1989, un grupo de 40 pequeños y medianos productores crea la Cooperativa Los Mimbreros, con el objeto de comercializar su propia producción, buscando acotar el accionar de los intermediarios, quienes se apropiaban de la renta intersectorial de la cadena. Siendo la única entidad en el rubro, en la actualidad nuclea al 75% de productores de mimbre y comercializa mimbre y artesanías desde el Puerto de Frutos, Tigre. Tiene un padrón de 150 socios que se ubican en la segunda sección del Delta Bonaerense, y trabaja con 70 artesanos, a quienes les vende la materia prima y les compra los productos manufacturados. En total posee un plantel de nueve empleados e impacta en forma directa e indirecta en 750 personas» (MDS-MINAGRI, 2010: 51).



sustitutos del mimbre—, situación que iba acompañada por la apertura comercial desplegada desde 1976 y hasta 2001. Esta situación generaba una competencia externa ante la cual los mimbreros tenían escasas posibilidades de persistir.

Desde 2002, el sector mimbrero ha tendido a mejorar sus perspectivas por un conjunto de factores, tales como la devaluación del peso argentino que viene contribuyendo una eficiente barrera ante la presencia de materiales sintéticos importados, aumento de la demanda por expansión del mercado interno, revalorización de los productos naturales, etc. A estos factores deben adicionársele elementos intrínsecos a la actividad. La producción de mimbre requiere baja inversión de capital, posee una rotación relativamente rápida, requiere una significativa cantidad de mano de obra —como contrapunto, la disponible actualmente no cubre la demanda de fuerza de trabajo— y una extensión de tierra pequeña (Galafassi, 2002; citado en MDS-MINAGRI, 2010: 51).

En relación con la experiencia de los mimbreros, resulta necesario destacar dos aspectos. Por un lado, la articulación de los diversos actores fue paulatina; ésta fue desarrollándose a través de un proceso de encuentros y desencuentros dentro del mismo espacio de trabajo que conectó a las diferentes instituciones. Por otro, cada nueva gestión (se tratara de Cooperativa o de las reparticiones del Estado) ha implicado un cambio en la perspectiva de los problemas fundamentales del territorio, del peso relativo de los mismos, y en consecuencia, de las decisiones que luego se transformaron en acciones. Asimismo, esa instancia de encuentros/desencuentros *ad-hoc* vinculada con la construcción de acuerdos de trabajo que no estaban dados, fueron calificados como parte de un proceso necesario en un primer momento de relacionamiento entre la Cooperativa, el MDS y el IPAF.

De las experiencias de la *Mesa de Representantes de Organizaciones de la Agricultura Familiar del Norte de Santa Fe* y de los *productores mimbreros de las Islas del bajo Delta del río Paraná* pueden obtenerse algunas enseñanzas. Entre ellas, cabe considerar que:

La *autonomía de los actores* en la *toma de decisiones* que encaran resulta central a la hora de generar prácticas para una gestión asociada. En este contexto, parece interesante remarcar la autonomía que se adquiere cuando el Estado transfiere herramientas para que las organizaciones amplíen esa capacidad de decidir sobre sí mismas. La transferencia metodológica sobre cómo administrar un microcrédito redundó en *autonomía económica* sobre aspectos cruciales como qué, cómo y para qué invertir. A su vez, esta situación impacta en la estrategia territorial o sectorial definida por cada organización, que se fortalece a la hora de alcanzar acuerdos. Este es el caso de los productores del norte de Santa Fe, que —tras haber sido solo sujetos de créditos— al poseer la herramienta financiera del programa de microcrédito han logrado mejorar sus posibilidades de incidir en el sector agrícola y agroindustrial. Esta capacidad de decidir también redundó en una *autonomía tecnológica*. Pues, al redefinirse enfoques de producción —arroz agroecológico— o diseñar y aplicar nuevas tecnologías de financiamiento y herramientas apropiadas para la producción —mimbre—, se está aportando a la construcción de sistemas



productivos que propenden a una mayor sustentabilidad social-económica y a poseer mayor independencia del mercado (en especial, de los preceptos de la revolución verde y de la biotecnológica).

El espacio de *tensión disputa-consenso consta de propósitos institucionales comunes y generales*. El mismo no se circunscribe a un objetivo identificado por todos los actores. En este sentido, y en función de los principios y de las acciones de cada una de las instituciones, el acuerdo inicial es sobre propósitos institucionales comunes y generales pero donde determinado tema-problema sobre el que se va definiendo la práctica social es el objeto a construir. Esto implica una actitud abierta a los cambios e ideas que surjan del propio proceso. Los actores implicados participan sobre la base de necesidades, propuestas y alternativas en un diálogo de búsquedas. Es así como en el caso de la experiencia del norte santafesino, por momentos prevalecen las intervenciones relacionadas con el arroz agroecológico, desvinculadas incluso con el tema del microcrédito. Desde estas líneas institucionales de acción, la búsqueda de integralidad en la intervención en gestión asociada resulta clave para sostener los procesos y acompañar los tiempos e intereses de las organizaciones de la agricultura familiar en la resolución de problemas complejos.

Por último, cabe considerar que el estilo de intervención en el territorio que se registra con las características socio-históricas del contexto, propende a la adecuación de instrumentos y metodologías a las exigencias y oportunidades que se presentan. Por el lado del Estado, resulta significativa la permeabilidad en los procedimientos y pautas institucionales que requieren cierta flexibilidad. Por el lado de las organizaciones, éstas deben desarrollar procesos de readecuación de sus estrategias para consensuar alternativas con las cuales viabilizar una determinada propuesta.

En la articulación entre Estado y organizaciones se abre un espacio de negociación entre los integrantes, ámbito que los desafía a pensar instrumentos que respondan a las necesidades de los procesos organizativos. Éste es el caso de la Cooperativa Los Mimbreros, donde fue necesario introducir cambios en la línea de crédito de la CONAMI, originando un nuevo destino de los fondos orientado a cubrir el margen de espera del productor hasta que la Cooperativa comercialice la producción. Esto resulta central si se considera que los intermediarios tradicionales operan obligando al productor a desprenderse de su mimbre a precios bajos, apropiándose de ese modo del margen de comercialización. En instancias como las aludidas resulta fundamental el accionar estatal. En tal sentido, las políticas públicas proponen instrumentos programáticos y metodologías de intervención de gestión asociada, que propenden a transformar las condiciones de vida de los agricultores familiares.





## A MODO DE CONCLUSIÓN. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS: NEODESARROLLISMO Y ECONOMÍA SOLIDARIA

¿Es la economía solidaria un enfoque para la acción política que pueda contribuir al cambio del modo de producción? Así planteada, esta pregunta está llamada a abrir un debate. Es justamente la finalidad que ha tenido este escrito, el de despertar más preguntas que respuestas. Por ello, para concluir se plantea una serie de elementos que resultan potencialmente útiles para abonar el abordaje de la economía solidaria latinoamericana y, en especial, argentina.

En primer lugar, los procesos de *descolectivización* son difíciles de revertir. En tal sentido, resulta necesario que las instituciones estatales compartan un proyecto político. Como se ha observado, dicho proyecto propende a dinamizar la autonomía de los actores en la toma de decisiones. Tales procesos promueven mecanismos para la utilización de tecnologías apropiadas para el sector agrícola y agroindustrial, favoreciendo tanto la construcción y acumulación de poder de los sectores populares, así como una gestión asociada de la política pública.

En segundo término, si se considera que desde 2003 se han desarrollado políticas públicas que propenden a la *politización* y a la *construcción de poder popular desde la economía solidaria*, la agricultura familiar posee un rol central en esta concepción de sociedad. No ya como un sector en el que se interviene promoviendo programas focalizados sobre temas puntuales y discontinuos en el tiempo, sino dirigidos a dar herramientas para que los procesos exitosos transformen a los agricultores familiares en pequeños empresarios orientados a nichos de mercado y/o al comercio exterior. En la concepción de sociedad que promueven políticas como las aludidas en el último apartado, se propende a otorgar autonomía a los agricultores familiares, viabilizando su rol estratégico en la producción de alimentos y a brindar herramientas para construir y fortalecer el poder de aquellos en sus mercados.

Por lo anterior, se entiende que las políticas públicas en la economía solidaria y el accionar de la sociedad civil organizada debe ir necesariamente de la mano. Por una parte, ello implica que los sujetos sociales modifiquen sus *estrategias de vida* y pasen de tener estrategias adaptativas (de reproducción) a otras de cambio (creativas). Tal como sostiene Urcola (2010), un sujeto con tales estrategias posee un carácter *activo* e inventivo junto a la capacidad de improvisar ante situaciones imprevistas y/o novedosas. Por otra, deben considerarse el acompañamiento institucional a tales cambios en las estrategias de vida. En las experiencias antes descriptas, la CONAMI intenta actuar a través de conceptos centrales para su perspectiva institucional: gradualidad, accesibilidad, adecuación, integralidad, institucionalidad.

Por último, reaparece la inquietud con la cual se inician las reflexiones finales. ¿Resulta contradictorio que un estado neo-desarrollista apunte a la creación de poder popular a través de la economía solidaria? Sin pretender ensayar una respuesta, esta vinculación no se considera más contradictoria que la relación establecida entre los estados neoliberales y sus políticas focalizadas de atención a la pobreza. Sin embargo, resulta necesario remarcar como novedad el esfuerzo de articulación encarado por distintas organizaciones estatales y de productores. En tal sentido, esta experiencia



debería ser potenciada y replicada en vistas a posibilitar la construcción de poder popular por parte de las organizaciones sociales. En este proyecto de país, el estado debe acompañar bajo un enfoque de economía solidaria, brindando estrategias, recursos y metodologías que permitan fortalecer las organizaciones sociales en general y las de los agricultores familiares en particular.

## BIBLIOGRAFÍA

- Andrenacci, L. (2002). Introducción, en Andrenacci, L. (organizador), *Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires*, Buenos Aires: Ediciones Al Margen, 6 pp.
- Anheier, H. (2000). Dimensions of the Third Sector: Comparative Perspectives on Structure and Change. Centre for Civil Society- London School of Economics. *Seminario «Central Policy Unit. The Third Sector: Beyond Government and Market»*. Hong Kong.
- Archambault, E. (2010). «The American and the French Third Sectors: a Comparison, Recent trends during the «Millennium Boom», and the Impact of the Crisis». *9th ISTR Conference: «Facing Crises: Challenges and Opportunities Confronting the Third Sector and Civil Society»*, Estambul.
- Basualdo, E. (2011). La autonomía relativa de la economía argentina durante la hegemonía neoliberal a nivel internacional. En E. Basualdo. *Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual*. Buenos Aires: Atuel.
- Cittadini R., Caballero L., Moricz M. y Mainella F. (2010). *Economía Social y Agricultura Familiar. Hacia la construcción de nuevos paradigmas de intervención*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
- Colli, N. y Olivier, E. (1963). *Noticias sobre cooperativas y pseudocooperativas argentinas anteriores a 1900*. Buenos Aires: Círculo de Estudios Cooperativistas.
- Gaiger, L. (2003). A Economia Solidaria diante do modo de produção capitalista. *Caderno do Centro de Recursos Humanos, n. 39*, Universidade Federal de Bahía, Salvador, 19 pp.
- Gallo, M. (2007). «Beneficio social de la electrificación rural a cambio de Rentabilidad» *XXI Conferencia Latinoamericana de Electrificación Rural*. Santo Domingo.
- Hintze, S. (2010). *La política es un arma cargada de futuro: economía social y solidaria en Brasil y Venezuela*. Buenos Aires: CLACSO-CICCUS.
- INAES (2008). *Re-empadronamiento Nacional y Censo Nacional Sectorial de Cooperativas y Mutuales*. Buenos Aires.
- MDS-MINAGRI (2010). *La juntada. Microcrédito, tecnología y gestión asociada en la Agricultura Familiar*. Buenos Aires.
- Merlinsky, G y Rofman, A. (2005). Los programas de promoción de la Economía Social: ¿una nueva agenda para las políticas sociales? En Forni, F. y Barreiro, L. (compiladores) *Caminos solidarios de la economía argentina*, Buenos Aires Ediciones Ciccus, 23 pp.
- Minujin, A (1993). *Desigualdad y exclusión. Desafíos para la política social en la Argentina de fin de siglo* Buenos Aires: UNCEF/LOSADA.



- Nun, J. (2001). *Marginalidad y exclusión social*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Rofman, A. (1999). *Desarrollo regional y exclusión social*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Rosa, P.; Vidosa, R.; García, A.; Vázquez Blanco, J. M. y Rofman, A. (2012). Caminos hacia la inclusión: experiencias participativas y políticas sociales en la Argentina de principios del siglo XXI, en Castronuovo, R. (compiladora) *Políticas sociales en el bicentenario*, Buenos Aires, EUDEBA, 9 pp.
- Salminis J. (2004). Significados, alcances y perspectivas del sector de la economía social. *Primer Encuentro Foro Federal de Investigadores y Docentes. La Universidad y la Economía Social en el Desarrollo Local*. Ministerio de Desarrollo Social. Buenos Aires.
- Svampa, M. (2000) (Editora). *Desde abajo. La transformación de las identidades sociales*, Buenos Aires: Biblos-UNGS.
- Tenti Fanfani, E. (1996). Cuestiones de exclusión y política, en Minujín, A. (compilador) «*Desigualdad y exclusión. Desafíos para la política social en la Argentina de fin de siglo*», Buenos Aires: UNICEF Losada.
- Urcola, M. (2010). *Hay un niño en la calle. Estrategias de vida y representaciones sociales de la población infantil en situación de calle*. Buenos Aires: CICCUS.
- Vázquez Blanco, J.M. y Rofman, A. (2011). «Al cierre del Bicentenario dos modelos de país en disputa», en Fraschina, J. y Vázquez Blanco, J. M. (compiladores), *Aportes de la Economía Política en el Bicentenario*. Buenos Aires, Prometeo Libros, 28 pp.

## FUENTES ELECTRÓNICAS

- Agis, E; Cañete, C. y Panigo, D. (2010). El impacto de la Asignación Universal por Hijo en Argentina. Extraído el 3 de enero de 2011, de [http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/documentos/AUH\\_en\\_Argentina.pdf](http://www.ceil-piette.gov.ar/docpub/documentos/AUH_en_Argentina.pdf)
- ANSES (2011). Aumento récord del 17,62% en las jubilaciones y pensiones. Extraído el 8 de febrero del 2012, de <http://www.anses.gov.ar/prensa/noticia.php?id=407>
- Marabotto, E. (2000). Otras Cartas de Ciudadanía. Extraído el 30 de enero de 2000, de <http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2000/01/30/i-00301d.htm>
- Moreno Ruiz, R. (2000). La génesis del Mutualismo moderno en Europa. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, n° 72. Extraído el 2 de diciembre de 2010, de [http://dialnet.unirioja.es/servlet/fi\\_chero\\_articulo?articulo=1119320&orden=50671](http://dialnet.unirioja.es/servlet/fi_chero_articulo?articulo=1119320&orden=50671)
- Página 12 (2011). El doble de lo que dejaron las AFJP. Extraído el 10 de diciembre de 2011, de <http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-183093-2011-12-10.html>

